

Detectives y armas

Este gobierno se ha caracterizado por ocultar para luego verse obligado a confesar que su actuación fue la que trato de esconder. Pero, este "estilo de administrar", también se perfila como pletórico en medidas oficiales que, posteriormente, desaparecen. Así, por ejemplo —entre muchos otros— la participación directa en los meses relativos a la insurrección sandinista, los diálogos "nacionales", la "guerra del atún", "soberanía en el mar y sus recursos", planes de vivienda, energía, etc., por supuesto, dejando a un lado la letanía de promesas (sin cumplir) del tristemente célebre "programa del Partido Unidad"

A la par de esa administración de lo oculto, del zig-zag y de las marchas atrás, todo esto ante la



Jorge Enrique
Romero Pérez

ausencia de equipo y de brújula políticas, los decretos ejecutivos han tratado de sustituir a una Asamblea Legislativa incapaz. No sólo los impuestos a la gasolina ("subsídios" a empresarios particulares en perjuicio de otros), sino también —ahora— el nombramiento de detectives ad hoc para que investiguen al Poder Ejecutivo. En otras palabras, el acusado en el tráfico de armas, volumen de equipo bélico sin inventario alguno ni destino conocido del mismo, etc., es el Poder Ejecutivo. Lógicamente, lo que procede es que el Poder Judicial (en virtud de la tesis democrática del control, vigilancia y frenos y contrapesos de los Poderes Públicos, heredada de la Revolución Francesa) ejerce —mediante el OJ (Organismo de Investigación Judicial)— la labor de vigilancia y fiscalización jurídica.

Esto, además de ridículo es falta de ética y de legalidad. Ante los desaciertos cotidianos del presente Poder Ejecutivo, cabe (un poco con paciencia y estu-por) esperar lo que le falta para que termine su gestión errada. El problema es que no se trata de un juego de infantes, sino que sus desaciertos y equivocaciones han venido a perjudicar la economía del país.

Sin embargo, existen aspectos mucho más de peso y de mayor calibre. Nos referimos a la legitimidad, apoyo y sustento del sistema político. A los costarricenses nos gusta expresar la solidez de la democracia. Empero, la negativa labor de los partidos tradicionales y las gestiones faltas de tino, cordura, eficacia y solvencia administrativa de los últimos gobiernos, están erosionando rápidamente la imagen de consistencia democrática de nuestra estructura política.

La ciudadanía se pregunta, llena de interrogantes, ¿para qué quieren el poder público los grupos personalistas y de espaldas a los electores que luchan en la arena electoral? ¿Adónde está el equipo capaz de enfrentar los problemas actuales y futuros de la nación, con honradez, inteligencia, prudencia y trabajo?

La responsabilidad grave que le corresponde al actual poder oficial ("Unidad sin caracismo y caracismo sin unidad") es la de haber contribuido a deteriorar el sistema político costarricense y la conciencia democrática en los electores, que contemplan descorazonados que los detentadores del poder fracasan en su gestión y traicionan sus programas de gobierno. Este delito de lesa patria debe pesar sobre la conciencia ciudadana con el fin de que comprendamos que la responsabilidad de los asuntos de la comunidad es de competencia de todos y no de una canchalla de profesionales de la política ineptos para el ejercicio cabal de la administración de la sociedad.